**Comité de Derechos Humanos**

Septiembre 2019

**Situación de derechos humanos en Nicaragua**

Informe conjunto elaborado por:

Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

Comisión Permanente de Derechos Humanos-Nicaragua (CPDH)



***INDICE***

1. INTRODUCCIÓN 1
2. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 1

Antecedentes de la situación actual. 1

El derecho a la vida es inherente a la persona humana (Art. 6; PIDCP). 4

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7; PIDCP). 5

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (Art. 9; PIDCP). 10

Debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (Art. 14; PIDCP). 12

1. CONCLUSIONES 13

## INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organización de la sociedad civil de mayor trayectoria en el trabajo por los derechos humanos y la única que ha logrado mantener su presencia y trabajo dentro de Nicaragua, en el contexto de la represión del Estado agudizada desde abril del 2018, pero cuyas causas se ubican en el año 2007, tras el ascenso al poder ejecutivo del actual partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); y, la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), a través de una alianza estratégica que data del año 2016, hemos estado trabajando en la atención de las violaciones de derechos humanos y en el proceso de recopilación, procesamiento, análisis y divulgación de información sobre dicha situación, tanto en el ámbito nacional, como internacional.

## SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

### Antecedentes de la situación actual.

En noviembre 2006 se realizaron elecciones nacionales (Presidenciales y legislativas) en las que resultó ganador el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En enero tras la toma de posesión el gobierno inició el proceso de partidización de las instituciones del Estado y de los procesos de interlocución con la sociedad.

A través de un decreto ejecutivo 112-2007[[1]](#footnote-1), que estableció los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC). Estas organizaciones fueron creadas por el partido sandinista sustituyendo los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley de Participación Ciudadana (Ley No. 475, Ley de Municipio (Ley No. 40), Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley No. 376), Ley de Contrataciones Municipales (Ley 801) y Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario (Ley No. 550). Las elecciones municipales del 2008, ampliamente criticadas por los partidos políticos participantes y la sociedad en general, marcaron de manera clara la centralización del poder en el partido sandinista y el control total de la gestión pública a todos los niveles.

El equilibrio bipartidario en los poderes del Estado (Consejo Supremo Electoral – CSE; Corte Suprema de Justicia – CSJ; Asamblea Nacional – AN) e instituciones públicas y entes autónomos (Ministerio Público – MP, por ejemplo)[[2]](#footnote-2); se fue inclinando hacia el partido sandinista a través del uso de los recursos del Estado para comprar voluntades y fidelidades.

La declaración de inconstitucionalidad del Articulo 147 de la Constitución Política por parte de la CSJ en octubre 2019 a través de la sentencia No. 504; abrió las puertas para la reelección indefinida de Ortega. En enero del 2010, el presidente Ortega sella su dominio absoluto en todos los poderes e instituciones del Estado cuando a través del Decreto Ejecutivo 03-2010[[3]](#footnote-3) prorroga en sus cargos a funcionarios de entes autónomos del Estado y Poderes del Estado, pasando por encima de la facultad de la Asamblea Nacional para realizar cambios.

Resultado de eso, prorrogó en sus cargos al Jefe del Ejército de Nicaragua, a la Jefa de la Policía Nacional, pasando por encima de las leyes orgánicas que establecían el traspaso de mando ordenado de dichas instituciones. También prorrogó al Procurador de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al 60% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y otros funcionarios de instituciones y entes autónomos. Lo que mereció la fidelidad personal de los funcionarios prorrogados.

Las elecciones del 2011, ampliamente criticadas inclinaron de manera irreversible la composición de la Asamblea Nacional, dando la cantidad calificada de votos, que el partido sandinista necesitaba para realizar cualquier tipo de cambios normativos e institucionales que le garantizaran la permanencia en el poder. Tanto la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA)[[4]](#footnote-4), como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE), coincidieron en señalar múltiples irregularidades en el proceso de elección que afectaba la igualdad de oportunidades de participación, así como la transparencia (entre otros aspectos).

Con el cambio en la correlación de fuerzas en el legislativo, el partido de gobierno lograba el control absoluto del Estado. De esta manera, se empezó el proceso de reformas y aprobación de leyes que fueron fortaleciendo la centralización del poder en el ejecutivo y limitando las posibilidades del legislativo y el resto de los poderes del Estado. Con ello se eliminó los pesos y contrapesos entre los poderes el Estado y todo funcionó desde ese tiempo al ritmo, decisión e interés del Presidente de la República.

El 18 de febrero del 2014, se aprueban las Reformas a la Constitución Política a través de las cuales desaparecen la prohibición constitucional de la reelección, ratifica la supremacía del ejecutivo en jefaturas del Ejército de Nicaragua (EN) y la Policía Nacional (PN). La independencia de ambas instituciones vitales de la seguridad nacional fue derribada tras la aprobación de nuevas leyes orgánicas; la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley No. 872[[5]](#footnote-5)) y la Ley de Reforma al Código Militar (Ley No. 855)[[6]](#footnote-6).

En abril del 2014, se da la elección de todos los funcionarios prorrogados siendo electos los que el partido de gobierno decidió y ratificó el control absoluto de los poderes e instituciones del Estado. El 80% de los magistrados fueron electos por su filiación sandinista.

Las elecciones de 2016 se realizaron en un contexto en el que todos los poderes del Estado, funcionarios y recursos estaban controlados por Ortega y su cúpula, liderada por su esposa y candidata a la vicepresidencia, Rosario Murillo. Pese a ello, los partidos autollamados opositores se apuntaron a la contienda.

Los informes del CSE indicaron que hubo un 70 % de participación, en contraste con la ausencia de votantes en la mayoría de los centros de votación que destacaron observadores nacionales, ciudadanía y organizaciones de sociedad civil. El FSLN obtuvo la victoria con el 72.5 % de los votos, seguido por el PLC quien obtuvo el 15 % de los votos[[7]](#footnote-7).

Es el contexto institucional y normativo en el que se dan las protestas sociales en Nicaragua en abril del 2018.

Para entender mejor el contexto en que nacieron las protestas antigubernamentales del 2018, cabe destacar algunos eventos clave ocurridos un mes antes de que estallara la crisis que exponen las tensiones ya existentes en Nicaragua:

* 12 de marzo: El Gobierno dio a conocer su intención de regular el uso de las redes sociales. Organizaciones de sociedad civil rechazaron la propuesta de una ley de esta índole pues resultaría en una restricción de la libertad de expresión.[[8]](#footnote-8)
* 3-13 de abril: Se dio la quema de la Reserva Biológica Indio Maíz, parte de la Reserva de Biosfera de Río San Juan donde fueron afectadas más de 6,000 mil hectáreas de bosque.[[9]](#footnote-9) La indolencia del Estado dio origen a movilizaciones ciudadanas auto convocadas.
* 11 de abril: En Managua, una marcha pacífica de 300 estudiantes a favor de la Reserva Indio Maíz fue reprimida por parte de grupos de choque de la Juventud Sandinista (JS), paramilitares, patrullas de policías motorizados y fuerzas especiales antimotines.
* 16 de abril: Se anunciaron reformas unilaterales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que proponían aumentar aportes de los cotizantes, de empresas y disminuir las pensiones.
* 18 de abril: Jóvenes autoconvocados como #SOSINSS, liderados por estudiantes de la UCA, protestaron en contra de las reformas y fueron atacados.

### El derecho a la vida es inherente a la persona humana (Art. 6; PIDCP).

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece con toda claridad el Derecho a la Vida (Art. 23); sin embargo, el Estado de Nicaragua ha faltado a su obligación de garantizar y proteger este derecho.

Ante las protestas iniciadas en abril del 2018, el Estado de Nicaragua, no solo no protegió el derecho a la vida de las personas que protestaban, en su mayoría jóvenes, sino que, desplegó operativos policiales de represión violenta, para desalojar a las personas de los sitios en los que realizaban dichos actos. Las acciones violentas fueron desarrolladas por una combinación de fuerzas de choque integradas por miembros de la Juventud Sandinista (organización del FSLN), fuerzas parapoliciales y paramilitares (integradas supuestamente por trabajadores de diversas instituciones del Estado, alcaldías y ex miembros del Ejército de Nicaragua), todas bajo el mando y coordinación de la Policía Nacional.

Durante las acciones de represión se denunció la utilización de francotiradores para la ejecución de los principales cabecillas de las protestas. Fotografías y videos circularon en las redes sociales en las que se observó que los grupos paramilitares portaban armas de grueso calibre y largo alcance. Algunas fotografías de las personas fallecidas y de las lesiones observables en los cuerpos confirman esta sospecha.

Como resultado de las acciones de represión, según nuestros registros, 332 personas murieron[[10]](#footnote-10), 5 de los cuales fueron registrados en los meses de mayo a agosto del presente año 2019,[[11]](#footnote-11) 319 hombres y 13 mujeres, cinco niños menores de 12 años y 26 adolescentes. El 47 % son jóvenes menores de 30 años y el 41 % son adultos entre 31 y 60 años. El 2 % restante son personas mayores.

En cuanto a la causa de muerte, se observa que el 88% murió por heridas de armas de fuego, el 3 % por quemaduras y el 2 % por heridas de arma blanca (punzocortante) y torturas.

CPDH recibió 3782 denuncias durante el año 2018 **y 2101 denuncias hasta agosto del 2019, para un total de 5,883 denuncias en 21 meses**, de éstas el **33**% de amenazas, asedio, acoso, el 17% por persecución política, el **18**% de detenciones ilegales, entre otras violaciones. En términos numéricos recibimos un total de **90** denuncias respecto a la muerte de personas en el marco de las acciones de represión, 47 denuncias de personas que escaparon de ser asesinadas.

Entre los adolescentes asesinados por ejemplo: Richard Eduardo Pavón Bermúdez, un adolescente de 17 años murió al ser alcanzado por disparos provenientes de la alcaldía de Tipitapa, según relata el padre ***“… mi hijo … pensé que andaba trabajando ya que él trabajaba con una señora … llegó un grupo de jóvenes … me preguntaban que si yo era el papá de Richard y yo le dije que si … me dijeron que lo habían … ahí por la alcaldía, también le pregunté que si era grave ellos me dijeron que fue al lado del corazón, al igual me dijo uno de los jóvenes que andaba … que el que lo había baleado había sido el cepol de la alcaldía (guarda de seguridad),… en eso yo levante a mi esposa y le dije que fuéramos al hospital a ver si no.era grave, llegando al hospital Yolanda Mayorga y me informaron que ya estaba fallecido, luego llegó la policía y me pidió información de donde fue que si el anda en la protesta, que si estaba a favor de la alcaldía o de quien y yo le contente que no sabía desde ese día me recepcionaron la denuncia…”***

La falta de acceso a la información, la manipulación de los datos y las abundantes evidencias requieren de un proceso de investigación independiente, técnico e imparcial.

Por otra parte, testimonios diversos de ex policías dan cuenta de que hubo orden expresa de la utilización de armas de fuego y garantías para su utilización con discreción e impunidad. Estos testimonios evidencian la existencia de una política de represión y la utilización de la ejecución extrajudicial como mecanismo de liquidación de la protesta. *“…él (el jefe) me entrega un AKM47 con balas reales, no balas de salva y me dice: Tomá, chavalo, hay que defender la revolución…" Cuando el policía se negó a aceptar el fusil, el jefe respondió: "que no te enseñaron a disparar en la academia? Y yo le contesté: me enseñaron a disparar, pero no a matar gente…”[[12]](#footnote-12)*

### Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7; PIDCP).

Nicaragua es signataria de la Convención Internacional Contra la Tortura, del Protocolo Facultativo de dicha Convención, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la Constitución Política de Nicaragua en su Art. 36 prohíbe explícitamente la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En Concordancia con estas normas internacionales y constitucionales, el Código Penal (Ley 641) establece el tipo penal de Tortura en su artículo 486.

En correspondencia a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y al documento de Naciones Unidas CAT/OP/12/5 “Directrices relativas a los Mecanismos Nacionales de Prevención”, Nicaragua creó el **Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)** mediante Acuerdo Presidencial No. 04-2012, Publicado en La Gaceta No. 10 del 18 de Enero de 2012. Sin embargo, dicho mecanismo no ha tenido en ningún momento actuación alguna. Lo que entre otras causas se debe a:

* La creación del mecanismo no cumplió con los criterios establecidos en el mismo protocolo en cuanto a su formación y coordinación con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
* La tortura, pese a ser una práctica de la Policía Nacional de Nicaragua desde hace muchos años, no es reconocida por el gobierno, ni el Estado de Nicaragua.
* La partidización de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) constituye el obstáculo principal para que dicha institución del Estado pueda cumplir con su mandato de monitoreo, seguimiento y promoción de los derechos humanos de los y las nicaraguenses.

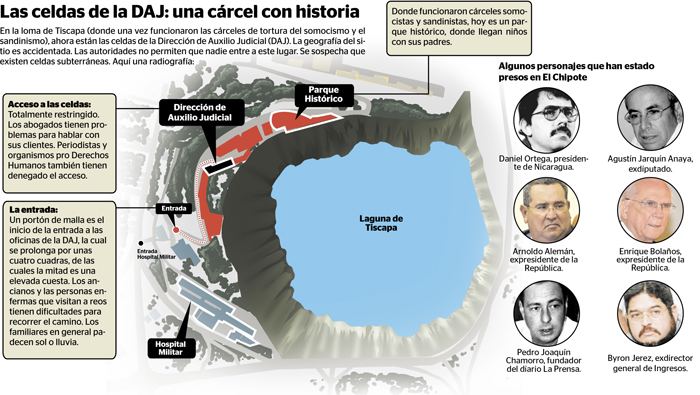
En cierta ocasión se le preguntó al entonces procurador de derechos humanos a cerca de la existencia de torturas en las cárceles de Nicaragua, el funcionario y militante del partido de gobierno expresó: ***“No voy a creer en el truquito de los gringos, de los organismos de inteligencia que financian a la CPDH, tengo demasiado trabajo para dedicarme (a eso)”,*** explicó el procurador Cabezas. **El Nuevo Diario, 25/03/2014 http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/315317-procurador-niega-violaciones-derechos-humanos-carc/**

Pese a la existencia del ordenamiento jurídico adecuado, la política del Estado ha sido de permisividad ante los actos de tortura que reiteradamente han sido denunciado desde hace muchos años. CPDH a través de visitas a las cárceles y centros penales realizadas en 2010 y 2014, recibió denuncias en diversos puntos del país del sometimiento a actos de torturas tratos crueles inhumanos y degradantes en las cárceles del país y principalmente las cárceles de El Chipote, ubicadas en la Loma de Tiscapa, lugar donde también opera la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional[[13]](#footnote-13).

Las cárceles de El Chipote han sido señaladas históricamente como un centro de torturas que operan con la misma finalidad desde su construcción a finales de la década de los años 30 del siglo y milenio pasado. En mayor 2014, Nicaragua recibió la visita del Sub Comité de Prevención de la Tortura (establecido en el Protocolo Facultativo); CPDH se reunión con los miembros de este comité en Managua y se entregó a ellos los informes de visitas a Centros Penales y Unidades Policiales realizados por CPDH a inicios de ese año. El informe del Sub Comité, aún no se conoce, pese a 5 años de haberse realizado dicha visita.

En diciembre del 2014, tras la aprobación de la Ley 840 Ley del Proyecto del Canal Interoceánico, centenares de campesinos protestaron ante la amenaza de expropiación de sus tierras. Las protestas en los departamentos de Rivas y Ría San Juan fueron sofocadas violentamente y detenidos de manera ilegal a más de 70 protestantes y trasladados desde sus lugares de origen a las cárceles de tortura El Chipote. Un importante porcentaje de ellos denunció haber sido torturados durante su detención.

En Septiembre del año 2015, al CPDH introdujo una iniciativa de ley encaminada a clausurar las Cárceles de Tortura El Chipote, la exposición de motivos da cuenta del uso histórico y simbólico de dichas instalaciones para la comisión de delitos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La mayoría legislativa de filiación sandinista, ni siquiera aceptó poner en agenda del día, la discusión de la iniciativa, contrario a eso, se dedicaron a negar la existencia de torturas.



http://www.laprensa.com.ni/2015/05/10/nacionales/1829395-15755

En el contexto de las protestas agudizadas en abril, El Chipote pudo ser conocido a nivel mundial. Esta cárcel fue el destino de las detenciones ilegales realizadas por la fuerzas policiales y grupos afines. En el interior de estas instalaciones miles de personas pasaron días y noches, muchas de ellas recibieron torturas de diverso tipo.

De las denuncias recibidas por la CPDH entre Abril 2018 y Agosto 2019, 1,033 fueron detenciones ilegales, de éstas 117 denunciaron actos de torturas. Aunque la mayoría de actos de torturas se dieron en las cárceles de El Chipote, CPDH recibió entre marzo y junio, más de 30 denuncias por torturas sufridas por las personas que estuvieron en los centros penales bajo condición de presos políticos.

Vale destacar que los denunciantes destacan que dicha actuación de los funcionarios se ejecutó en cumplimiento de órdenes de sus superiores. ***“…mientras me torturaban, estaba un oficial de policía de alto rango que en ese momento no sabía quien era, pero luego lo volví a ver en televisión y resulta que es…”*** (Testimonio contenido en una de las denuncias). Lo anterior, es parte de anotar un patrón de permisividad e impunidad en el uso de la tortura.

Mientras se realizaba la audiencia en el proceso penal que se impulsó contra Medardo Mairena (líder campesino de las protestas, desde la Ley del Canal Interoceánico), un oficial de policía deponía como testigo en su contra, el procesado logró identificar a éste como su torturador solo por la voz, porque mientras fue torturado en El Chipote lo mantuvieron con la cabeza encapuchada para que no viera a sus verdugos, sin embargo, la defensa de Mairena ejercida por CPDH exacerbó la paciencia del testigo haciendo que levantara la voz en tono agresivo, ese fue el momento en que el acusado reconoció al torturador. Se hizo referencia en la audiencia y el juez de la causa, ni siquiera incitó al Ministerio Público hacer alguna investigación.

Entre las denuncias recibidas por CPDH 90 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, se ha detallados diversas formas de torturas, entre ellas:

* Golpes en diversas partes del cuerpo, principalmente en rostro, espalda y abdomen.
* Ahogamientos, a través de la colocación de telas (trapos) sobre el rostro y descargas de agua sobre la tela y el rostro hasta el límite de resistencia de la persona.
* Ahogamientos por inmersión en aguas corrientes (ríos, cascadas) y almacenadas (baldes, pozos).
* Violación sexual masiva y constante por parte de los perpetradores durante el tiempo que la víctima está sometida por ellos (en casos de mujeres víctimas).
* Choques eléctricos en partes vitales y genitales.
* Amenazas con armas de fuego (incluso fusiles de guerra) en la cabeza y en la boca (introducción del cañón de fusil en la boca de la víctima. Utilizando el “juego de la ruleta rusa”.
* Alzamiento con amarres de pies y manos (guindado) boca arriba y boca abajo.
* Sometimiento a condiciones de aislamiento en lugares insalubres con presencia de heces fecales sólidas y en agua supuestamente para uso de la persona.
* Apuñalamiento y lesiones de partes íntimas (testículos).
* Abusos sexuales, tocamientos, palabras amenazantes de violencia sexual (hombres y mujeres).
* Disparos de armas de fuego al oído de la víctima para intimidarla, aturdirla y amenazar su vida y la de su familia.
* Golpes con tabla de madera con clavos incrustados para causar lesiones y dolor a la víctima.
* Amarre de las víctimas sin ropa en espacios con varias personas, como mecanismo de humillación y sometimiento.
* Amenazas de muerte contra familiares como mecanismo de intimidación y tortura sicológica.
* Ubicación en lugares tradicionalmente definidos como lugares de castigos y torturas, tales como El Chipote, El Infiernillo, la Celda de los Suspiros.
* Atar los testículos y halarlos hasta que la persona asienta “cooperar”.
* Introducción anal de objetos diversos (bastón, amansa bolos, fusil, cañón de mortero).
* Pisotones fuertes con botas militares sobre pies descalzos hasta hacerlos sangrar o desgarrar.
* Corte de pelo obligatorio para exponerlos a la burla del resto de detenidos y para identificarlos como los “asesinos de policías”.

Las acciones de tortura sufridas por estas personas han tenido muchas consecuencias en su vida como individuos y en su entorno familiar. Los actos de tortura denunciados no han quedado ahí, muchas de estas personas continúan sufriendo el asedio, el acoso, las amenazas y persecución política de sus torturadores.

La mayoría de ellos han mostrado problemas relacionados con su salud mental. Las sintomatologías que presentan son: depresión, estrés postraumático agudo, ansiedad, delirio de persecución, trastornos de sueño y problemas alimenticios. La posibilidad de desarrollar un trastorno afectivo bipolar tipo II (depresión e hipomanía), una condición alarmante si no son atendidos a tiempo.

Las afectaciones no solo son de las victimas sino también de sus familiares que muestran una serie de emociones incontroladas como el temor que se lleven nuevamente a su hijo, pareja o familia a mantener una vigilancia constante hacia personas que conducen motos, vehículos, civiles o Policía Nacional que transitan cerca del hogar. Todo esto provoca que la persona se sienta nerviosa, dejando heridas físicas y mentales.

Muchas de estas afectaciones requieren de la atención sicológica continua que facilite el proceso de recuperación emocional, sin embargo, hay que considerar que en otras personas el nivel de afectación a la salud mental es tan grave que requiere de tratamientos farmacológicos y la atención siquiátrica. Por otra parte, las lesiones físicas que los actos de tortura han provocado en muchas personas hace necesario la atención médica y la atención fisioterapéutica para la rehabilitación física, por ejemplo, personas que sufrieron lesiones en manos, pies, en ojos, oídos, etc.

### Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (Art. 9; PIDCP).

Como se mencionó en el antecedente de este informe, la Policía Nacional, grupos paramilitares y parapoliciales y fuerzas partidarias de choque, son los actores claves de las acciones de persecución, asedio y amenazas. Un patrón identificado en las denuncias de detenciones ilegales es la detención sufrida principalmente a manos de la Policía Nacional en su mayoría, sin embargo, aproximadamente el 30% de las detenciones ilegales reportadas a CPDH, tuvieron como punto de partida el secuestro por parte de estas fuerzas afines al gobierno.

La CIDH en su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en el contexto de las protestas, da cuenta de la existencia del patrón de detenciones arbitrarias en las que el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza[[14]](#footnote-14).

Según nuestro ordenamiento jurídico ninguna persona puede ser detenida sin la existencia de un mandamiento judicial, salvo por orden de un jefe de estación policial y, excepcionalmente, cuando la persona es detenida en el momento de cometer un delito. Sin embargo, en ninguno de las detenciones se ha cumplido con estas condiciones y requisitos.

CPDH recibió 1,033 denuncias por detenciones ilegales, en el 20% de éstas, se señala como autores de las detenciones a paramilitares, para policiales y fuerzas de choque pro-gobierno. En el 100% de ellas, se denuncia el uso de violencia.

En el contexto de las acciones de represión del derecho a la protesta pacífica, al menos 603 personas fueron detenidas y sometidas a procesos penales. El 87 % de los detenidos hombres. De estas, solo 320 fueron puestas a la orden de juez para enfrentar procesos penales y más de 373 aún se desconocía su paradero y situación legal.

Una defensora de derechos humanos de CPDH (ACHM), fue sometida a 112 días de prisión arbitraria. Sin que, pasado el tiempo establecido en la Constitución y las Leyes de 48 horas, hubiera sido puesta a la orden de autoridad competente, fue puesta en libertad sin habérsele abierto proceso penal como parte de las liberaciones de presos políticos impulsadas por el gobierno.

También tuvimos la representación de una persona de la tercera edad que fue sometido a prisión arbitraria por más de 3 meses y 25 días, sin que de acuerdo a la falta penal que se le imputaba se le hubiese abierto proceso. En este caso incluso, el juez llamó a audiencia preliminar y ante la ausencia del procesado lo declaró en rebeldía, siendo que estaba detenido ilegalmente por la Policía Nacional desde hacía más de 6 días cuando le fue programada la audiencia. Esta persona, también fue liberada por el mecanismo de liberación de presos políticos, sin embargo, por el asedio, persecución y amenazas (dos veces fue amenazado de detener nuevamente) tuvo que exiliarse en Costa Rica.

Cabe señalar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se pronunció en su 84va sesión sobre dos casos de detenciones en el marco de la crisis de 2018, ambas fueron declaradas como arbitrarias. A pesar de la publicación de estas opiniones, ninguna recomendación ha sido implementada hasta esta fecha (las dos víctimas han sido liberadas bajo la Ley de Amnistía).[[15]](#footnote-15)

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente (Art. 10; PIDCP).

Entre las personas que enfrentaron procesos, la CPDH brindó asesoría y representación legal para defensa técnica de 210 personas. De los procesos que CPDH llevó la representación, el 97 % hombres. El 7 % son adolescentes entre 16 y 17 años y el 52 % tienen entre 18 y 30 años. Por otra parte, estas personas fueron acusadas por delitos graves como terrorismo (50 %), portación y tenencia ilegal de armas (16 %), crimen organizado (13 %), tortura (7 %) y asesinato (3 %). Bajo estos tipos penales todos enfrentaron procesos en prisión preventiva.

Los y las privados de libertad fueron sometidos a tratos violentos y de represión dentro de los centros penales. De las 210 personas representadas por CPDH, al menos 40 denunciaron actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos fueron tratados como condenados, aunque los procesos estaban abiertos, no hubo separación respecto a quienes ya estaban condenados, fueron sometidos a días y semanas de aislamiento y les fueron privados sus derechos a visitas, a atención de la salud, medicamentos y alimentación.

*“En una ocasión nos echaron vidrio molido en la comida...”* relata un excarcelado. *“Los custodios nos gritaban asesinos, golpistas, terroristas…*”, también denunciaron que no se les entregaban todos los alimentos que los familiares los llevaban. A algunos incluso, les prohibieron en más de una ocasión el ingreso de alimentos llevados por los familiares, sometiendo de esta manera al privado de libertad a padecer hambre dentro del centro penal.

El trato era tan malo, que ellos realizaban protestas constantes por mejores condiciones, protestas que eran reprimidas violentamente y los supuestos líderes sometidos a violencia, tortura y aislamiento prolongado.

### Debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (Art. 14; PIDCP).

La CPDH identificó patrones que expresan la falta de tutela jurídica de los derechos de las personas procesadas por parte de la autoridad judicial. Dichos patrones fueron identificados en los 97 procesos penales en los cuales representó a 210 personas, éstos son los siguientes:

* Pese a que la Policía Nacional en el 90% de los casos detuvo a las personas sin causa justa y sin haberse dado las condiciones de flagrancia o la existencia de una orden de autoridad judicial previa. El juez de la causa no consideró el principio de ilegalidad de la detención. De igual manera, la detención en el 40% se realizó con la intermediación de paramilitares o fuerzas afines al gobierno, pero sin la legalidad para actuar.
* La Policía Nacional presentó al 95% de los procesados más allá del tiempo establecido constitucionalmente, sin que la autoridad judicial tutelara el derecho de la persona detenida.
* La totalidad de los acusados y acusadas, fueron presentados en total violación de los derechos de la persona detenida a comunicarse con sus familiares y tener el acceso a un abogado para su defensa, sin que la autoridad judicial tutelara este derecho.
* Los libelos acusatorios presentados por el Ministerio Público, en su totalidad carecían de los requisitos establecidos por la Ley para ser admitidos por la autoridad judicial. Tanto el Ministerio Público, como la Policía Nacional detuvieron a los ciudadanos por hechos que no constituyen delitos, sin embargo, por la política de criminalización del derecho a la protesta pacífica, los jueves estaban “orientados” a aceptar las acusaciones, abrir el proceso y decretar prisión preventiva para todos.

Los procesos se concentran en la ciudad capital de Managua independientemente del lugar de los hechos, incurriendo en una sustracción de juez natural. Jueces territoriales se han declarado incompetentes para conocer las causas que han sido remitidas a los juzgados centrales en Managua. Esto muestra el interés del Estado por controlar todos los hilos procesales en los casos que consideramos como una forma de criminalización de la protesta.

**Ejemplo: El caso de Medardo Mairena, líder campesino del Movimiento Anticanal**

El 13 de julio de 2018, fue detenido ilegalmente en el aeropuerto internacional de Managua **Medardo Mairena**, líder del Consejo Nacional por la soberanía, la Tierra y lagos de Nicaragua (Movimiento Campesino Anticanal) y representante del movimiento campesino en el Diálogo Nacional.

El dirigente iba a una gira de trabajo por varias ciudades de los Estados Unidos en compañía de **Pedro Mena**, también miembro del movimiento. Al momento de presentarse en la ventanilla de despacho migratorio para salir del país, la Policía Nacional procedió a detenerlo sin mayor explicación.

Inmediatamente, los familiares que lo acompañaban notificaron a la CPDH y un equipo se movilizó al aeropuerto para solicitar información a la autoridad migratoria y a agentes de la Policía presentes, pero esta se les fue negada.

Tras dos horas de la detención, la Policía Nacional publicó un comunicado, resultado de la insistencia de la OACNUDH y de la Misión de Seguimiento de la OEA (MESENI), en que afirmaban haber detenido al “terrorista” Medardo Mairena cuando pretendía escapar.

La CPDH, en acompañamiento de las familias de ambos campesinos, solicitó información el 14 y 15 de julio, tras cumplirse las 48 horas reglamentarias establecidas por la Constitución. El equipo jurídico de la CPDH permaneció en los juzgados esperando que fuese presentado ante el juez competente, pero no aparecieron ni se informó sobre su paradero. Al día siguiente, se presentaron recursos de exhibición personal a favor de los detenidos, sin resultado alguno durante los siguientes dos días, por lo que el equipo denunció su desaparición.[[16]](#footnote-16)

Posteriormente, a través de los medios de comunicación oficialistas se informó que habían sido presentados ante el juez en audiencia preliminar. En dicha audiencia no se permitió la entrada de los abogados defensores de la CPDH y se simuló garantizar el derecho a la defensa. Ambos fueron acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones, daños en perjuicio de la sociedad nicaragüense, del Estado y víctimas naturales indicadas.

Las acusaciones fueron vinculadas a un supuesto ataque de los manifestantes en contra de la estación de policial de Morrito, departamento de Río San Juan, donde resultaron muertos cuatro oficiales, incluyendo al jefe de la estación.

## CONCLUSIONES

La profunda crisis sociopolítica que ha sacudido a Nicaragua desde abril de 2018 ha estado marcada por graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias a gran escala, el uso sistemático de la tortura y los tratos crueles contra presos políticos y la supresión efectiva de las libertades fundamentales de expresión y asociación de sus ciudadanos, así como sus derechos básicos de acceso a la justicia, el derecho a la vida, la salud y la educación.

Sin embargo, como este informe y otras presentaciones de la sociedad civil a las LOI han señalado, esta crisis es el resultado de años de desintegración progresiva del estado de derecho en el país y el deterioro de los derechos individuales y colectivos de los nicaragüenses.

**A la luz de estos hechos y teniendo en cuenta el informe del Estado parte, recomendamos al Comité que haga las siguientes preguntas:**

¿Qué medidas concretas ha tomado el Estado parte para garantizar la plena independencia de los órganos legislativos y judiciales?

¿Qué preve el Estado parte para modificar el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para lograr un órgano de administración de justicia independiente e imparcial?

A la luz de las graves violaciones de los derechos humanos que se han producido desde las protestas de abril de 2018, ¿qué medidas ha tomado el Estado parte para garantizar una investigación independiente, exhaustiva y transparente de estos casos?

¿Cuáles son los lazos entre las fuerzas para-policiales que han estado reprimiendo y atacando activamente a los manifestantes o personas que se cree están vinculadas a las protestas y las acciones de las fuerzas de la Policía Nacional?

¿Las denuncias de exacciones conjuntas de parapolicia / autoridades serán debidamente investigadas y llevadas ante la justicia?

¿Cómo garantizará el Estado parte el desmantelamiento, el desarme y la judicialización de estos grupos?

¿Cómo garantiza el Estado parte el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación? ¿Por qué aún no se han tomado estos pasos?

A la luz de la gravedad de la crisis sociopolítica e institucional, ¿por qué el Estado parte todavía no ha permitido que los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos regresen al país?

1. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%2528%24All [↑](#footnote-ref-1)
2. Entre el partido sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista – PLC, acordado desde el año 2000, conocido como el Pacto Ortega – Alemán). [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/86f56b6d771ea926062576c600543044%3FOpenDocument&ved=2ahUKEwi6rpzI9O7kAhUJmRoKHekSAcwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1ZEW1mAvM9Qm-aqJrO43RW&cshid=1569515453045 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/2012/Inf\_NIC\_s.pdf&ved=2ahUKEwjR1ube8e7kAhVCUhoKHYajBmAQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw06EE023vam6qIkvPgjW02r [↑](#footnote-ref-4)
5. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 125 del 7 de Julio de 2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Publicada en La Gaceta No. 27 del 11 de febrero del 2014. [↑](#footnote-ref-6)
7. Prado, Y. ["FSLN alcanza el 72.5% de los votos en históricas elecciones de Nicaragua"](https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:48641-fsln-alcanza-el-725-de-los-votos-en-historicas-elecciones-de-nicaragua), *El 19 Digital*, 7 de noviembre de 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Salinas, C. ["Daniel Ortega pretende regular las redes sociales en Nicaragua"](https://elpais.com/internacional/2018/03/14/america/1521060980_560036.html), *El País*, 15 de marzo de 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Torrez, C. "Incendio en Indio Maíz quemó 'el área mejor conservada de todo el país', según Unesco", *La Prensa*, 15 de abril de 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. CPDH, realizó y llevó un registro de las personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas y las acciones de represión. Se elaboró un listado exhaustivo y sometido a procesos de verificación cruzada y actualización permanente a través del cual se estableció la cifra de 332 personas que han fallecido por causas relacionadas a la protesta y represión. [↑](#footnote-ref-10)
11. CIDH registra 322 personas fallecidas. ["CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la criminalización de la protesta y a respetar a las personas privadas de libertad y sus familias",](http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/187.asp) Comunicado de Prensa de la CIDH, 24 de agosto de 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Testimonio de un joven policía que desertó. Salió del país huyendo y solicitó ocultar su identidad por seguridad de él y su familia. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasta inicios de este año se trasladaron las cárceles de auxilio judicial al Complejo Judicial Evaristo Vasquez, ubicado en la periferia de Managua. [↑](#footnote-ref-13)
14. Graves violaciones a los  
    derechos humanos en el  
    marco de las protestas  
    sociales en Nicaragua [↑](#footnote-ref-14)
15. [A/HR C/WGAD/2019/19](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_19.pdf) ; [A/HRC/WGAD/2019/16](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_16.pdf)  [↑](#footnote-ref-15)
16. García, E. ["Medardo Mairena desaparecido, denuncia la CPDH"](https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469790-medardo-mairena-desaparecido-denuncia-cpdh/), *El Nuevo Diario*, 17 de julio de 2018. [↑](#footnote-ref-16)